

Medellín, trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Proceso	DECLARATIVO - LESIÓN ENORME
Radicado	05266 31 03 002 2010 00548 02
Demandante	LUCILA AGUIRRE DE OSORIO
Demandado	JOSE ALEJANDRO RIVEROS CASTILLO
Juzgado origen	TERCERO CIVIL CIRCUITO ENVIGADO

Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte actora, frente al auto del 25 de febrero de 2022, mediante el cual se terminó el proceso de la referencia por desistimiento tácito.

1. ANTECEDENTES.

Lucila Aguirre de Osorio, a través de apoderado, promovió demanda contra el José Alejandro Riveros Castillo pretendiendo la declaración de lesión enorme del negocio jurídico contenido en la Escritura Pública No 113 del 2 de marzo de 2007 de la Notaría Única de Pácora (Caldas)¹, demanda que fuera admitida por auto del 13 de diciembre de 2010².

Posteriormente, el demandado contestó la demanda a través de apoderado³, se corrió traslado de las excepciones⁴ y se continuó el trámite legal hasta proferirse sentencia el 4 de septiembre de 2014⁵, la decisión fue objeto de apelación; en segunda instancia se decretó nulidad de lo actuado desde la sentencia, ordenando integración del litis consorcio necesario⁶. En cumplimiento de lo resuelto por el superior, el juzgado ordenó la notificación de los litisconsortes, siendo emplazados y notificados a través de curador *ad litem*⁷.

Mediante memorial del 3 de diciembre de 2018 el apoderado demandante informó el fallecimiento de su representada⁸, razón por la cual, el juzgado

¹ Ver “expediente digitalizado” / “primera instancia” / C 001 / archivo 05266310300220100054800_C001 págs. 5-131

² ibidem pág. 132

³ ibidem págs. 251-312

⁴ ibidem pág. 325

⁵ ibidem págs. 393 -420

⁶ Ver “expediente digitalizado” / “primera instancia” / C007 / archivo 052663130220100054800_C007 págs.7 - 13

⁷ Ver “expediente digitalizado” / “primera instancia” / C 001 / archivo 05266310300220100054800_C001 pág. 463

⁸ ibidem pág. 483

de origen lo requirió para que proporcionara información relevante de cara a la sucesión procesal⁹, el mandatario allegó registros civiles de nacimiento que acreditan la calidad de hijos de la demandante¹⁰, seguidamente, por auto del 4 de octubre de 2019 el juzgado reconoció los sucesores procesales, requiriendo al apoderado para que informara los datos de notificación¹¹.

El mandatario allegó poderes especiales que le fueran otorgados por algunos de los sucesores para su representación¹², por auto del 13 de febrero de 2020 el juzgado reconoció personería, autorizó una dirección física informada por el apoderado demandante para la notificación de los sucesores de la demandante señores Ancizar, Mercedes y Constanza Osorio Aguirre y requirió al extremo activo para que cumpliera la carga procesal consistente en la notificación de las personas referidas, so pena de decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito de conformidad con lo prescrito en el artículo 317 del CGP¹³ y; mediante proveído del 25 de febrero de esta anualidad, el juzgado de conocimiento decidió terminar el proceso por tal causa, argumentando que el demandante no cumplió dentro del término con la gestión de notificación pendiente¹⁴.

2. LA APELACIÓN.

La decisión fue controvertida vía recurso de reposición y en subsidio apelación por el apoderado de la parte actora, manifestando que a partir del 20 de marzo de 2020 y por causa de la pandemia por Covid 19 la Rama Judicial estuvo cumpliendo funciones en forma anormal, se distorsionaron los términos y solo para el 1° de marzo de este año, se normalizó la labor de las oficinas judiciales, estando además truncada la notificación; adicionalmente, indicó que se aplicó indebidamente la norma, pues el numeral 1 del artículo 317 del CGP alude a la actuación y no al proceso, siendo consecuencia jurídica el desistimiento de una actuación que previamente haya solicitado la parte, no así del proceso y; agregó que era

⁹ ibidem pág. 485

¹⁰ ibidem págs. 486-510

¹¹ ibidem pág. 511

¹² ibidem pág. 513-517; 520-538

¹³ ibidem págs. 539-540

¹⁴ Ver carpeta “primera instancia” /02AutoTerminaProcesoPorDesistimientoTacito

posible la continuidad del proceso, porque el fallecimiento del demandante no hace que el poder culmine y el apoderado representa no solo a la demandante original, sino a algunos de sus herederos.

El juzgado decidió no reponer la decisión con fundamento en que, la parte pudo dar cumplimiento a la carga procesal a partir del 1° de julio de 2020, fecha en que se reanudaron los términos judiciales, sin que lo hiciera, pues la notificación pudo haber sido cumplida por servicio de mensajería o por canales digitales con ocasión de la expedición del Decreto 806 de 2020; agregó que conforme el artículo 317 inciso 1° del CGP, se requirió a la parte para que procediera con la gestión de los herederos determinados faltantes para continuar el trámite del proceso, carga que debía ser cumplida, pues sin ello no podría avanzarse para proferir sentencia, por tanto, no advirtió interpretación errada de la norma.

Por lo anterior, decidió mantener su decisión, concedió la apelación en el efecto suspensivo y ordenó la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, encontrándose el presente asunto previsto en el literal e) del numeral 2 del artículo 317 y en el numeral 7 del artículo 321 del mismo estatuto.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si se cumplieron los presupuestos para decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Desistimiento Tácito (Normatividad).

El numeral primero del artículo 317 del CGP dispone que el desistimiento tácito se aplicará, entre otros, cuando para continuar con el trámite de cualquier actuación promovida a instancia de parte, se requiera que esta cumpla una carga procesal. En dichos eventos el juez ordenará cumplirlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la providencia que así disponga y, de no realizarse, se tendrá por desistida tácitamente la actuación, así, el desistimiento tácito se erige como una forma anormal de terminación del proceso.

Con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la COVID-19, se expidió el Decreto 564 de 2020 que en el artículo 2° consagró la suspensión de términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito, desde el 16 de marzo de 2020 y que se reanudaría un mes después, contado a partir del día siguiente al del levantamiento de la suspensión que dispusiera el Consejo Superior de la Judicatura.

Con relación al propósito de la figura del desistimiento tácito, la Corte Constitucional explicó:

“El desistimiento tácito, en criterio de la Sala, cumple dos tipos de funciones (supra num. 5.1): de un lado, sancionar la negligencia, omisión o descuido de la parte demandante y contribuir a conseguir una tutela judicial efectiva. De otro lado, garantizar el derecho de acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente; el derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia; la certeza jurídica; la descongestión y racionalización del trabajo judicial y la solución

oportuna de los conflictos¹⁵. Con relación a las primeras, como lo recuerda el Ministerio Público, la finalidad de la disposición demandada es obtener el cumplimiento del deber constitucional de “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (artículo 95.7 C.P.). Con relación a las segundas, tales finalidades, para la Sala, son legítimas y, además, imperiosas a la luz de la Constitución, primero, porque no están prohibidas explícita o implícitamente por la Carta y, segundo, porque lo que persiguen es la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de los usuarios de la justicia, la cual encuentra respaldo en los principios antes referidos...”¹⁶.

Igual entendimiento de la norma ha establecido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia¹⁷, en el sentido de establecer que:

“el «desistimiento tácito» consiste en «la terminación anticipada de los litigios» a causa de que los llamados a impulsarlos no efectúan los «actos» necesarios para su consecución. De suerte que a través de la medida, se pretende expulsar de los juzgados aquellos pleitos que, en lugar de ser un mecanismo de resolución de conflictos se convierten en una «carga» para las partes y la «justicia»; y de esa manera: (i) Remediar la «incertidumbre» que genera para los «derechos de las partes» la «indeterminación de los litigios», (ii) Evitar que se incurra en «dilaciones», (iii) Impedir que el aparato judicial se congestione, y (iv) Disuadir a las partes de incurrir en prácticas dilatorias - voluntarias o no- y a propender porque atiendan con lealtad y buena fe el deber de colaboración con la administración de justicia.”¹⁸

3.4 CASO CONCRETO

De los fundamentos jurídicos expuestos se deduce que el desistimiento tácito fue instituido en nuestro ordenamiento procesal con el objeto de

¹⁵ Sentencia C-1186 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa - Corte Constitucional.

¹⁶ Sentencia C-173 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido - Corte Constitucional.

¹⁷ Véase entre otras las sentencias STC1836-2020, STC4021-2020, STC9945-2020 y STC11191-2020

¹⁸ CSJ, sentencia STC11191 del 9 de diciembre de 2020, exp. 2020-01444-01, citada por el juez de primer grado.

garantizar los principios de celeridad, economía y tutela judicial efectiva y tiene como presupuesto que las partes cumplan sus cargas dentro de los términos previstos, a fin de evitar que el procedimiento se prolongue en el tiempo por falta de una actuación que le es atribuible y es por eso que su inobservancia implica como consecuencia adversa la terminación del proceso.

El artículo 317 del Código General del Proceso establece la procedencia del desistimiento en varias hipótesis, entre ellas, (i) cuando el juzgador requiere al interesado para el cumplimiento de una carga procesal que le corresponde, a través de auto de requerimiento y en un término de 30 días, y (ii) cuando el proceso permanece inactivo en la secretaría del despacho durante un año contado desde el día siguiente al de la última actuación.

En el presente caso, se encuentra acreditado que, ante el fallecimiento de la demandante, se tuvieron como sucesores procesales de la demandante a los señores Constanza, Carlos Arturo, Alberto, Esperanza, María del Carmen, María Magnolia, Gabriela, Cecilia, María Antonieta, Augusto, Ancizar y Mercedes Osorio Aguirre, según auto del 4 de octubre de 2019, encontrándose pendiente de notificación los señores Constanza, Ancizar y Mercedes Osorio Aguirre, particularmente, debía remitirse la citación para notificación personal a la dirección física informada por el apoderado demandante¹⁹, razón por la cual el juzgado de conocimiento lo requirió para el cumplimiento de la carga procesal pendiente so pena de aplicar el desistimiento tácito establecido en el artículo 317 del CGP.

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales con ocasión de la emergencia sanitaria, a partir del 16 de marzo de 2020²⁰, siendo reanudados el primero de julio de la misma anualidad²¹, por consiguiente, teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 2° del Decreto 564 de 2020 y que el requerimiento fue notificado en estados del 14 de febrero de 2020, el término para atender la carga de notificación vencía el 18 de

¹⁹ Informada en memorial del 23 de enero de 2020. Ver "expediente digitalizado" / "primera instancia" / C 001 / archivo 05266310300220100054800_C001 págs. 539-540

²⁰ Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020

²¹ Acuerdo PCSJA20-11557 del 5 de junio de 2020

agosto de la misma anualidad, sin que la parte actora hubiese atendido la carga impuesta, pues no consta en el expediente memorial agregado destinado a cumplir el requerimiento o actuación de oficio o a petición de parte que hubiese interrumpido el término.

Bajo esa línea, no es de recibo el argumento del recurrente al justificar su inactividad con base en la anormalidad de la prestación del servicio, pues existió norma que definió una suspensión de términos para la aplicación del desistimiento tácito, precisamente con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, sin embargo, el Decreto 564 de 2020 estableció un límite temporal sujeto a la fecha de reanudación de términos del Consejo Superior de la Judicatura, dependencia que dispuso el levantamiento a partir del 1° de julio de 2020, luego, el requerimiento debió atenderse y acreditarse en la debida oportunidad acudiendo a las herramientas dispuestas para tal fin.

Ciertamente, la dinámica de la prestación del servicio de justicia cambió con ocasión de la emergencia sanitaria, sin embargo, una vez levantada la suspensión de términos, a partir del 1° de julio de 2020, no impidió la continuidad del trámite de los procesos, pues acaeció una nueva realidad basada en la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales que se consolidó en el Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, así entonces, aun cuando la presencialidad ha tenido límites, lo cierto es que se dispusieron canales digitales para la interacción entre los operadores de justicia y los usuarios, tales como el correo electrónico institucional, luego, el vocero judicial como conocedor del derecho debía acudir a las nuevas herramientas y lineamientos normativos para acreditar ante el Juzgado, mediante el correo electrónico institucional, el cumplimiento de las gestiones de notificación requeridas e incluso pudo acudir a la notificación de los sucesos procesales vía mensaje de datos en los términos del art. 8 del citado Decreto.

Puestas así las cosas, no es aceptable el reproche del recurrente al intentar justificar su inactividad por la ausencia de presencialidad en las sedes judiciales, cuando se expidió norma que reguló la manera como debían gestionarse y tramitarse los procesos judiciales.

Aunado a lo anterior, no se aprecia una indebida aplicación del artículo 317 del CGP, por cuanto el desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso que se deriva, entre otros casos, del incumplimiento de una actuación o carga procesal que incumbe a la parte y de la cual depende la continuación del trámite, en este caso, la notificación de los sucesores procesales se requería para impartir continuidad al proceso, puesto que se acreditó la calidad de herederos de la demandante fallecida y la aptitud legal para sucederla, siendo necesaria su integración al proceso, máxime cuando existe auto en firme que dispuso su reconocimiento.

En síntesis, la parte demandante fue requerida para acatar una carga procesal que no cumplió en el término legal, a pesar de contar con las herramientas para ello, por consiguiente, se ajusta a los presupuestos normativos la terminación del proceso por desistimiento tácito, por lo que habrá de confirmarse la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 25 de febrero de 2022, mediante el cual se terminó el proceso por desistimiento tácito.

SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

TERCERO: REMITIR el expediente al juzgado de origen para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado